

PERIODO 120°



REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

33^a REUNION – 17^a SESION ORDINARIA
6 DE NOVIEMBRE DE 2002

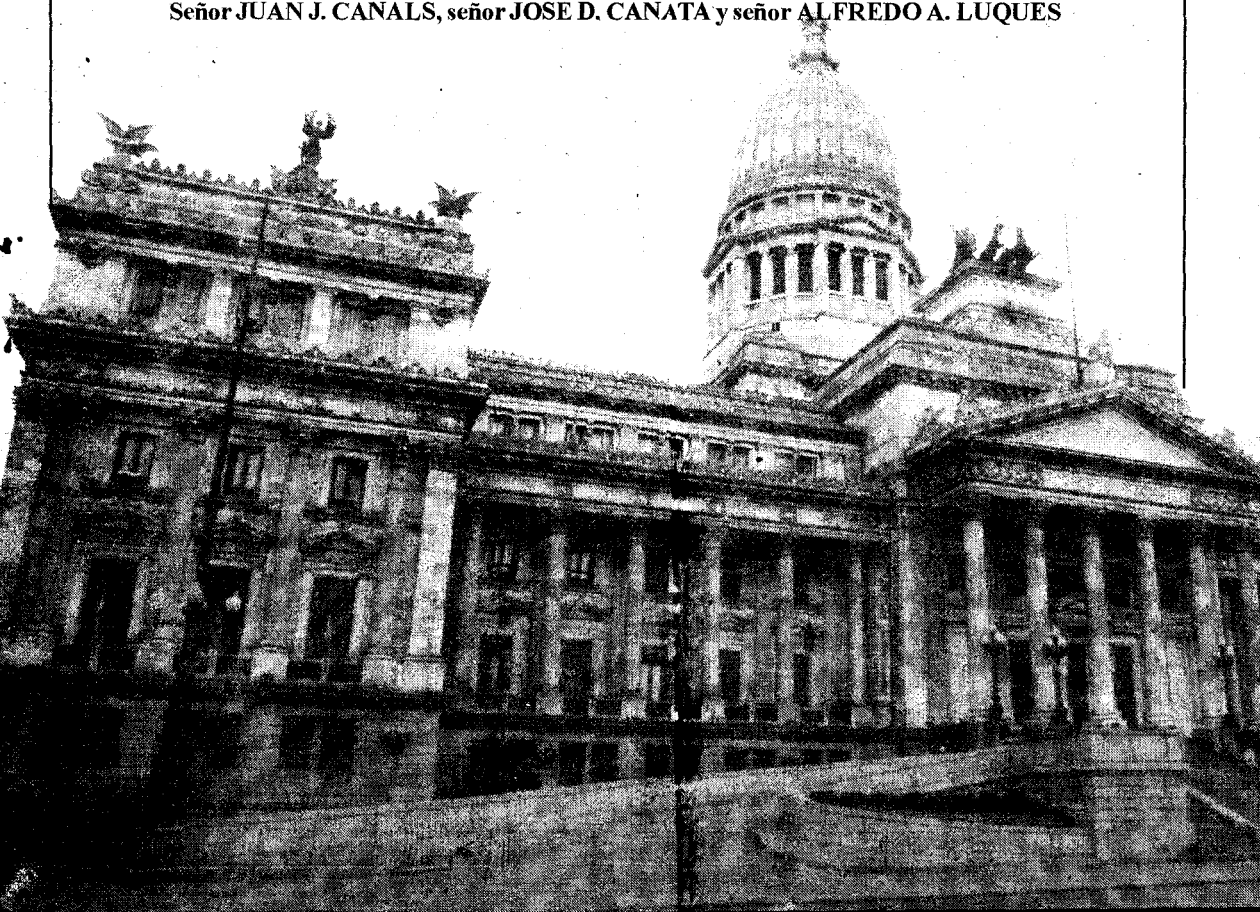
Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor JUAN CARLOS MAQUEDA, del señor vicepresidente del Honorable Senado,
doctor MARCELO EDUARDO LOPEZ ARIAS, y del señor vicepresidente 1° del Honorable
Senado, don RAUL BAGLINI

Secretarios:

Señor JUAN C. OYARZUN y señor JORGE HORACIO AMARFIL

Prosecretarios:

Señor JUAN J. CANALS, señor JOSE D. CANATA y señor ALFREDO A. LUQUES



PRESENTES:

AGÜNDEZ, Jorge A.
 ALPEROVICH, José J.
 ARANCIO, Lylia M.
 AVELÍN, Nancy B.
 BAGLINI, Raúl E.
 BARRIONUEVO, José L.
 BRIZUELA DEL MORAL, Eduardo S.
 BUSTI, Jorge P.
 CAFIERO, Antonio F.
 CAPARRÓS, Mabel L.
 CAPITANICH, Jorge M.
 CASTRO, María E.
 CHIAPPE, Lázaro A.
 COLAZO, Mario J.
 COLOMBO, María T.
 CONTI, Diana
 CURRETTI, Mirian B.
 FERNÁNDEZ, Nicolás A.
 FERNÁNDEZ de KIRCHNER, Cristina E.
 GALLIA, Sergio A.
 GIOJA, José L.
 GÓMEZ de BERTONE, Deolide C.
 GÓMEZ DIEZ, Ricardo
 HALAK, Beatriz S.
 ISIDORI, Amanda M.
 JENEFES, Guillermo R.
 LAMBERTO, Oscar S.
 LATORRE, Roxana I.
 LESCANO, Marcela F.
 LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.
 MAESTRO, Carlos
 MAQUEDA, Juan C.
 MARTÍ, Rubén A.
 MARTÍN, Floriana N.
 MAYANS, Miguel Á.
 MAZA, Ada M.
 MENEM, Eduardo
 MERA, Mario R.
 MORALES, Gerardo R.

MORO, Eduardo A.
 MÜLLER, Mabel H.
 NEGRE de ALONSO, Liliana T.
 OVIEDO, Mercedes M.
 PARDAL, Jorge A.
 PASSO, Juan C.
 PAZ, Elba A.
 PICHETTO, Miguel Á.
 RASO, Marta E.
 SAPAG, Luz M.
 SEGUÍ, Malvina M.
 TAFFAREL, Ricardo C.
 TERRAGNO, Rodolfo
 USANDIZAGA, Horacio D.
 VERNA, Carlos A.
 WALTER, Pablo H.
 YOMA, Jorge R.
 ZAVALÍA, José L.

AUSENTES:

GUINLE, Marcelo A. H.
 OCHOA, Raúl E.
 PARDO, Ángel F.
 PRADES, Carlos A.
 PUERTA, Federico R.

EN COMISION:

BAR, Graciela Y.
 DANIELE, Mario D.
 ESCUDERO, Sonia M.
 FALCÓ, Luis
 LOSADA, Mario A.
 PERCEVAL, María C.
 SALVATORI, Pedro

CON LICENCIA POR MATERNIDAD:

IBARRA, Vilma L.

SUMARIO

1. Izamiento de la **bandera nacional** en el mástil del recinto. (Pág. 7883.)
2. Mensajes del Poder Ejecutivo solicitando acuerdos. (Pág. 7883.)
3. Lectura y aprobación del plan de labor para el día de la fecha. (Pág. 7884.)
4. Moción de preferencia formulada por el señor senador Yoma para tratar en la próxima sesión y en primer término el dictamen de la Comisión de Legislación General que establece una prórroga por ciento ochenta días para las ejecuciones (S.-2.824 y 2.910/02) Se aprueba. (Página 7884.)
5. Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Discapacidad, en el proyecto de ley de la senadora Raso y otros señores senadores, por el que se crea una comisión bicameral investigadora del cumplimiento de la ley 24.452, ley de cheque, en lo que se refiere a la integración del fondo de financiamiento del programa para personas con discapacidad (S.-1.847/02). Se aprueba. (Pág. 7886.)
6. Consideración del dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Discapacidad en el Proyecto de ley de la señora senadora Isidori y otros señores senadores, sobre asignación de cupos de programas sociolaborales para personas con discapacidad (S.-2.155/01). Se aprueba. (Pág. 7894.)
7. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de co-

- solución 196/02 (ratificación del acuerdo de estabilidad en el precio mayorista del gas licuado de petróleo) (S.-2.001/02). Se aprueba. (Pág. 7950.)**
49. **Consideración del dictamen de las comisiones de Industria y de Agricultura y Ganadería en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti y otros señores senadores, por el que se declara de interés parlamentario la LXXIII Exposición Nacional de Ganadería, Granja, Agricultura, Industria, Comercio y Servicios a realizarse en Resistencia, Chaco (S.-1.876/02). Se aprueba. (Pág. 7952.)**
 50. **Consideración del dictamen de las comisiones de Ciencia y Tecnología y de Industria en el proyecto de declaración del señor senador Falcó, por el que se manifiesta beneplácito por el desarrollo de un prototipo precompetitivo de nariz electrónica para su aplicación en la industria (S.-773/02). Se aprueba. (Pág. 7953.)**
 51. **Consideración del dictamen de la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública en el proyecto de declaración de la señora senadora Maza, por el que se expresa beneplácito por los avances en la producción nacional de la vacuna Candid I contra la fiebre hemorrágica argentina (S.-2.369/02). Se aprueba. (Pág. 7954.)**
 52. **Consideración del dictamen de la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública en el proyecto de comunicación de la señora senadora Maza, por el que se solicitan informes sobre accidentes por pirotecnia (S.-2.368/02). Se aprueba. (Pág. 7955.)**
 53. **Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley del señor senador Fernández y de la señora senadora Caparrós por el que se transfiere un inmueble a la Municipalidad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz (S.-1.155/02). Se aprueba. (Pág. 7956.)**
 54. **Consideración del dictamen de la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública en el proyecto de ley del señor senador Yoma y de la señora senadora Gómez de Bertone por el que se deroga el decreto 2.399/71, reglamentario de la ley 14.072 (ejercicio de la medicina veterinaria) (S.-436/02). Se aprueba. (Pág. 7958.)**
 55. **Modificación del plan de labor. Se aprueba. (Página 7961.)**
 56. **Consideración del proyecto de ley de la señora senadora Avelín y otros señores senadores, por el que se crea el Programa Nacional de Educación para la Prevención Sísmica (S.-345/02). Se aprueba. (Pág. 7961.)**
 57. **Homenaje a la memoria de los caídos en Medio Oriente. (Pág. 7970.)**
 58. **Consideración del dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Asuntos Constitucionales y de Familia y Minoridad y de Derechos y Garantías, en el proyecto de ley en revisión sobre aplicación del cupo femenino en el procedimiento de la negociación colectiva y en el proyecto de ley de la señora senadora Escudero y otras señoras senadoras, por el que se modifica su similar 23.551, libertad sindical respecto de la igualdad de oportunidades para ambos sexos y en el proyecto de ley de la señora senadora Gómez de Bertone y otros señores senadores, sobre la aplicación del cupo femenino a las leyes 23.551, asociaciones sindicales, y 23.546 negociación colectiva (C.D.-163/01 y S.-2.187/01, S.-1.542/02). Se aprueba. (Pág. 7971.)**
 59. **Consideración del dictamen de las comisiones de Ecología y Desarrollo Humano, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre ley general del ambiente (C.D.-113/01). Se aprueba. (Página 7978.)**
 60. **Modificación del plan de labor y moción de preferencia formulada por el señor senador Baglini para tratar en la próxima sesión, en segundo término, el proyecto de ley del que es autor junto con el señor senador Lamberto autorizando al Banco de Inversiones y Comercio Exterior S.A. (BICE S.A.) para crear fideicomisos (S.-2.540/02). Se aprueba. (Pág. 7990.)**
 61. **Consideración del proyecto de comunicación del señor senador Pardal y otros señores senadores, por el que se solicita la apertura de la planta Puerto en la dársena E, en el Puerto Nuevo de Buenos Aires, dedicada a la producción vitivinícola (S.-2.438/02). Se aprueba. (Página 7990.)**
 62. **Consideración del dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Educación y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se crea el régimen de jubilación ordinaria a prorrata (C.D.-61/01). Se aprueba. (Pág. 7992.)**
 63. **Consideración del dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de ley en revisión por el que se sustituye el artículo 39 e incorpora otro de la ley 24.521 (educación superior) en lo que respecta a la formación del posgrado (C.D.-139/00). Se aprueba. (Pág. 7994.)**
 64. **Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el**

perteneciente al Fondo Hídrico (S.-2.932/02). (Pág. 8101)

LXVIII. Proyecto de comunicación del senador Falcó solicitando la agilización de los trámites del Registro de Armas en el RENAR (S.-2.933/02). (Pág. 8101.)

LXIX. Proyecto de comunicación del senador Falcó solicitando la puesta en práctica de un plan canje de pasivos por granos (S.-2.934/02). (Pág. 8103.)

LXX. Proyecto de comunicación del senador Falcó solicitando el plan propuesto por la Mesa de Construcción y Vivienda (S.-2.935/02). (Pág. 8104.)

LXXI. Proyecto de comunicación del senador Falcó solicitando informes relacionados con la aplicación de la resolución 58/01 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (S.-2.936/02). (Pág. 8105.)

LXXII. Proyecto de comunicación del senador Falcó solicitando se revea la aplicación de la resolución 58/01 por afectar la comercialización de lanas producidas en Río Negro (S.-2.937/02). (Pág. 8105.)

LXXIII. Proyecto de resolución del senador Maestro aprobando las Normas para la Elaboración, Redacción y Diligenciamiento de los Proyectos, Actos y Documentación Administrativa (S.-2.939/02). (Pág. 8106.)

LXXIV. Proyecto de declaración del senador Maestro, manifestando satisfacción por el ingreso de la Península Valdés al Club de las Más Bellas Bahías del Mundo (S.-2.940/02). (Página 8113.)

LXXV. Proyecto de ley del senador Passo, destinando una partida presupuestaria anual para la investigación y desarrollo del proyecto Motricom II (S.-2.941/02). (Pág. 8113.)

LXXVI. Proyecto de comunicación de los senadores Brizuela del Moral y Colombo solicitando una tasa diferencial para los créditos que otorguen los bancos nacionales destinados a la producción agropecuaria (S.-2.942/02). (Pág. 8114.)

LXXVII. Proyecto de declaración de los senadores Arancio de Beller y Morales manifestando pesar por la muerte del escritor Jorge Domingo Calvetti (S.-2.943/02). (Pág. 8115.)

LXXVIII. Proyecto de comunicación de los senadores Losada y Conti solicitando informes sobre las denuncias por sedición contra varios ciudadanos efectuadas en la provincia de Corrientes (S.-2.944/02). (Pág. 8115.)

LXXIX. Proyecto de ley del senador Yoma sobre régimen de preferencia de las universidades nacionales en la contratación de consultorías por parte del sector público nacional (S.-2.945/02). (Pág. 8116.)

LXXX. Proyecto de declaración de la senadora Seguí declarando de interés el XXI Encuentro Nacional de la Asociación Argentina de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Menores y Familia, a llevarse a cabo en San Miguel de Tucumán (S.-2.946/02). (Pág. 8117.)

LXXXI. Proyecto de ley del senador Usandizaga modificando la ley 20.628 –impuesto a las ganancias– respecto de la amortización directa de bienes nacionales (S.-2.947/02). (Pág. 8118.)

78. Apéndice:

I. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 8118.)

II. Inserciones. (Pág. 8122.)

—En Buenos Aires, a las 18 y 17 del miércoles 6 de noviembre de 2002:

Sr. Presidente (Maqueda). – Como existe quórum, queda abierta esta sesión.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Maqueda). – Invito a la señora senadora por Santa Cruz Cristina Fernández de Kirchner a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y a todos los presentes a ponerse de pie.

—Puestos de pie los presentes, la señora senadora Fernández de Kirchner procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. *(Aplausos.)*

2

MENSAJES DEL PODER EJECUTIVO SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente (Maqueda). – Por Secretaría se dará cuenta de los mensajes ingresados del Poder Ejecutivo solicitando acuerdos.

En coincidencia con la señora senadora Halak, quiero aclararle a otra senadora que en mi provincia, Santiago del Estero, también el cincuenta por ciento es ocupado en todos los órdenes por mujeres. Y eso hace a la verdadera igualdad.

Como decía el señor senador Baglini –a quien le preocupa el cupo masculino– si hablamos de igualdad, debemos compartir un cincuenta y un cincuenta por ciento.

Tengo el orgullo de decir que por iniciativa de la señora de Juárez –que es la actual vicegobernadora– en todos los poderes del Estado de mi provincia la mujer participa en un cincuenta por ciento. (*Aplausos en las galerías.*)

Sr. Presidente (Maqueda). – Tiene la palabra la señora senadora Gómez de Bertone.

Sra. Gómez de Bertone. – Señor presidente: agradezco a las señoras senadoras y al señor senador compañero sindical las expresiones que han vertido y recojo lo que dijo el senador Baglini con respecto a la igualdad de oportunidades. No les quepa la menor duda de que éste es el primer paso. Como dijo la senadora Paz, vamos por más.

Por consiguiente, después de este proyecto seguimos pensando que en los sindicatos las mujeres también tienen que gozar de igualdad (*Aplausos en las galerías.*)

Sr. Presidente (Maqueda). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Maqueda). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

Sra. Gómez de Bertone. – ¡Que conste que fue aprobado por unanimidad!

Sr. Presidente (Maqueda). – Así se hará.

Pido por favor a los señores senadores y senadoras que no se retiren del recinto, porque nos quedamos sin quórum.

59

LEY GENERAL DEL AMBIENTE

Sr. Presidente (Maqueda). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Ecología y Desarrollo Humano, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en el pro-

yecto de ley en revisión sobre ley general del ambiente. (Orden del Día N° 883.)

–El texto es el siguiente:

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Ecología y Desarrollo Humano, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, han considerado el proyecto de ley venido en revisión sobre Ley General del Ambiente; y, por las razones que dará el miembro informante os aconsejan su aprobación. Asimismo se ha considerado la fe de erratas ingresada como expediente C.D.-3/2002, cuyas correcciones se incorporan al dictamen.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 10 de septiembre de 2002.

Mabel L. Caparrós. – Liliana T. Negre de Alonso. – Carlos A. Verna. – Deolide C. Gómez de Bertone. – Jorge A. Agúndez. – José J. Alperovich. – Ada M. Maza. – María T. Colombo de Acevedo. – Mabel H. Müller. – María C. Perceval. – Nicolás A. Fernández. – Marcelo A. H. Guinle. – Marcela F. Lescano. – Guillermo R. Jenejes. – Rubén A. Martí. – Marcelo E. López Arias. – Ricardo C. Taffarel. – Eduardo A. Moro. – Elva A. Paz. – Miguel A. Mayans. – Oscar S. Lamberto. – José L. Gioja. – Pablo H. Walter. – Mario D. Daniele.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

(24 de octubre de 2001)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

LEY GENERAL DEL AMBIENTE

Bien jurídicamente protegido

Artículo 1° – La presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.

Art. 2° – La política ambiental nacional deberá cumplir los siguientes objetivos:

- a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas;
- b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria;

- c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión;
- d) Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales;
- e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos;
- f) Asegurar la conservación de la diversidad biológica;
- g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente, para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo;
- h) Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable a través de una educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal;
- i) Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la misma;
- j) Establecer un sistema federal de coordinación interjurisdiccional, para la implementación de políticas ambientales de escala nacional y regional;
- k) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental.

Art. 3º - La presente ley regirá en todo el territorio de la Nación; sus disposiciones son de orden público, operativas y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidas en ésta.

Principios de la política ambiental

Art. 4º - La interpretación y aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios:

Principio de congruencia. La legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley; en caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga.

Principio de prevención. Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir.

Principio precautorio. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón

para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.

Principio de equidad intergeneracional. Los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras.

Principio de progresividad. Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos.

Principio de responsabilidad. El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan.

Principio de subsidiariedad. El Estado nacional, a través de las distintas instancias de la administración pública, tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el accionar de los particulares en la preservación y protección ambientales.

Principio de sustentabilidad. El desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal, que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras.

Principio de solidaridad. La Nación y los Estados provinciales serán responsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar, así como de la minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos.

Principio de cooperación. Los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional. El tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en forma conjunta.

Art. 5º - Los distintos niveles de gobierno integrarán en todas sus decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental, tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios enunciados en la presente ley.

Presupuesto mínimo

Art. 6º - Se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en

general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable.

Competencia judicial

Art. 7º - La aplicación de esta ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia, o las personas.

En los casos que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal.

Instrumentos de la política y la gestión ambiental

Art. 8º - Los instrumentos de la política y la gestión ambiental serán los siguientes:

1. El ordenamiento ambiental del territorio.
2. La evaluación de impacto ambiental.
3. El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas.
4. La educación ambiental.
5. El sistema de diagnóstico e información ambiental.
6. El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable.

Ordenamiento ambiental

Art. 9º - El ordenamiento ambiental desarrollará la estructura de funcionamiento global del territorio de la Nación y se generará mediante la coordinación interjurisdiccional entre los municipios y las provincias, y de éstas y la ciudad de Buenos Aires con la Nación, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA); el mismo deberá considerar la concertación de intereses de los distintos sectores de la sociedad entre sí, y de éstos con la administración pública.

Art. 10. - El proceso de ordenamiento ambiental, teniendo en cuenta los aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local, regional y nacional, deberá asegurar el uso ambientalmente adecuado de los recursos ambientales, posibilitar la máxima producción y utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación y desaprovechamiento y promover la participación social en las decisiones fundamentales del desarrollo sustentable.

Asimismo, en la localización de las distintas actividades antrópicas y en el desarrollo de asentamientos humanos, se deberá considerar en forma prioritaria:

- a) La vocación de cada zona o región, en función de los recursos ambientales y la sustentabilidad social, económica y ecológica;
- b) La distribución de la población y sus características particulares;

- c) La naturaleza y las características particulares de los diferentes biomas;
- d) Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales;
- e) La conservación y protección de ecosistemas significativos.

Evaluación de impacto ambiental

Art. 11. - Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución.

Art. 12. - Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente. Las autoridades competentes determinarán la presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar una evaluación de impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste aprobación o rechazo de los estudios presentados.

Art. 13. - Los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos.

Educación ambiental

Art. 14. - La educación ambiental constituye el instrumento básico para generar en los ciudadanos, valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con: un ambiente equilibrado, propendan a la preservación de los recursos naturales y su utilización sostenible, y mejoren la calidad de vida de la población.

Art. 15. - La educación ambiental constituirá un proceso continuo y permanente, sometido a constante actualización que, como resultado de la orientación y articulación de las diversas disciplinas y experiencias educativas, deberá facilitar la percepción integral del ambiente y el desarrollo de una conciencia ambiental.

Las autoridades competentes deberán coordinar con los Consejos Federales de Medio Ambiente (COFEMA) y de Cultura y Educación, la implementación de planes y programas en los sistemas de educación, formal y no formal.

Las jurisdicciones, en función de los contenidos básicos determinados, instrumentarán los respectivos programas o currículos a través de las normas pertinentes.

Información ambiental

Art. 16. – Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, deberán proporcionar la información que esté relacionada con la calidad ambiental y referida a las actividades que desarrollan.

Todo habitante podrá obtener de las autoridades la información ambiental que administren y que no se encuentre contemplada legalmente como reservada.

Art. 17. – La autoridad de aplicación deberá desarrollar un sistema nacional integrado de información que administre los datos significativos y relevantes del ambiente y evalúe la información ambiental disponible; asimismo, deberá proyectar y mantener un sistema de toma de datos sobre los parámetros ambientales básicos, estableciendo los mecanismos necesarios para la instrumentación efectiva a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).

Art. 18. – Las autoridades serán responsables de informar sobre el estado del ambiente y los posibles efectos que sobre él puedan provocar las actividades antrópicas actuales y proyectadas.

El Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, elaborará un informe anual sobre la situación ambiental del país que presentará al Congreso de la Nación. El referido informe contendrá un análisis y evaluación sobre el estado de la sustentabilidad ambiental en lo ecológico, económico, social y cultural de todo el territorio nacional.

Participación ciudadana

Art. 19. – Toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general.

Art. 20. – Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas, como instancias obligatorias para la autorización de aquellas, actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente.

La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes; pero en caso de que éstas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública.

Art. 21. – La participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados.

Seguro ambiental y fondo de restauración

Art. 22. – Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el

ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiese producir, asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación.

Sistema federal ambiental

Art. 23. – Se establece el Sistema Federal Ambiental con el objeto de desarrollar la coordinación de la política ambiental, tendiente al logro del desarrollo sustentable, entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el de la Ciudad de Buenos Aires. El mismo será instrumentado a través del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA).

Art. 24. – El Poder Ejecutivo propondrá a la Asamblea del Consejo Federal de Medio Ambiente el dictado de recomendaciones o de resoluciones, según corresponda, de conformidad con el acta constitutiva de ese organismo federal, para la adecuada vigencia y aplicación efectiva de las leyes de presupuestos mínimos, las complementarias provinciales y sus reglamentaciones en las distintas jurisdicciones.

Ratificación de acuerdos federales

Art. 25. – Se ratifican los siguientes acuerdos federales:

1. Acta constitutiva del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), suscrita el 31 de agosto de 1990, en la ciudad de La Rioja, cuyo texto integra la presente ley como anexo I.
2. Pacto Federal Ambiental, suscrito el 5 de junio de 1993, en la ciudad de Buenos Aires, cuyo texto integra la presente ley como anexo II.

Autogestión

Art. 26. – Las autoridades competentes establecerán medidas tendientes a:

- a) La instrumentación de sistemas de protección de la calidad ambiental que estén elaborados por los responsables de actividades productivas riesgosas;
- b) La implementación de compromisos voluntarios y la autorregulación que se ejecuta a través de políticas y programas de gestión ambiental;
- c) La adopción de medidas de promoción e incentivos. Además, se deberán tener en cuenta los mecanismos de certificación realizados por organismos independientes, debidamente acreditados y autorizados.

Daño ambiental

Art. 27. — El presente capítulo establece las normas que regirán los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos que, por acción u omisión, causen daño ambiental de incidencia colectiva. Se define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos.

Art. 28. — El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. En caso de que no sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva que determine la Justicia ordinaria interviniente, deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental que se crea por la presente, el cual será administrado por la autoridad de aplicación, sin perjuicio de otras acciones judiciales que pudieran corresponder.

Art. 29. — La exención de responsabilidad sólo se producirá acreditando que, a pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar culpa concurrente del responsable, los daños se produjeron por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.

La responsabilidad civil o penal, por daño ambiental, es independiente de la administrativa. Se presume *iuris tantum* la responsabilidad del autor del daño ambiental, si existen infracciones a las normas ambientales administrativas.

Art. 30. — Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el artículo 43 de la Constitución Nacional, y el Estado nacional, provincial o municipal, asimismo, quedará legitimado para la acción de recomposición o de indemnización pertinente, la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción.

Deducida demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los titulares señalados, no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros.

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente toda persona podrá solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo.

Art. 31. — Si en la comisión del daño ambiental colectivo hubieren participado dos o más personas, o no fuere posible la determinación precisa de la medida del daño aportado por cada responsable, todos serán responsables solidariamente de la reparación frente a la sociedad, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí para lo que el juez interviniente podrá determinar el grado de responsabilidad de cada persona responsable.

En el caso de que el daño sea producido por personas jurídicas la responsabilidad se hará extensi-

va a sus autoridades y profesionales, en la medida de su participación.

Art. 32. — La competencia judicial ambiental será la que corresponda a las reglas ordinarias de la competencia. El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general. Asimismo, en su sentencia, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, el juez podrá extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente a su consideración por las partes.

En cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida preparatoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá, asimismo, disponerlas, sin petición de parte.

Art. 33. — Los dictámenes emitidos por organismos del Estado sobre daño ambiental, agregados al proceso, tendrán la fuerza probatoria de los informes periciales, sin perjuicio del derecho de las partes a su impugnación.

La sentencia hará cosa juzgada y tendrá efecto *erga omnes*, a excepción de que la acción sea rechazada, aunque sea parcialmente, por cuestiones probatorias.

Del Fondo de Compensación Ambiental

Art. 34. — Créase el Fondo de Compensación Ambiental que será administrado por la autoridad competente de cada jurisdicción y estará destinado a garantizar la calidad ambiental, la prevención y mitigación de efectos nocivos o peligrosos sobre el ambiente, la atención de emergencias ambientales, asimismo, a la protección, preservación, conservación o compensación de los sistemas ecológicos y el ambiente.

Las autoridades podrán determinar que dicho fondo contribuya a sustentar los costos de las acciones de restauración que puedan minimizar el daño generado.

La integración, composición, administración y destino de dicho fondo serán tratados por ley especial.

Art. 35. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

RAFAEL M. PASCUAL.

Roberto C. Marafioti.

Anexo I

ACTA CONSTITUTIVA DEL CONSEJO FEDERAL DE MEDIO AMBIENTE

Las altas partes signatarias:

Declaran:

RECONOCIENDO: Que la preservación y conservación del ambiente en el territorio del país requiere

para el mejoramiento de la calidad de vida una política coordinada y participativa, en virtud de que el sistema ambiental es una complejidad que trasciende las fronteras políticas provinciales.

Que el federalismo es un sistema político de distribución territorial de las competencias que puede resolver con eficacia la administración local de los problemas ambientales.

Que resulta igualmente apto para generar una política ambiental de integración entre las provincias y el gobierno federal.

Que nos hallamos frente a un problema de carácter universal que constituye uno de los grandes desafíos que enfrenta la comunidad internacional.

CONSIDERANDO: Que el ambiente es un patrimonio común de la sociedad y que de su equilibrio depende la vida y las posibilidades de desarrollo del país.

Que la coordinación entre los distintos niveles gubernativos y sociales son indispensables para la eficacia de las acciones ambientales.

Que los recursos ambientales deben ser aprovechados de manera que se asegure una productividad óptima y sostenida, con equilibrio e integridad.

Que la difusión de tecnologías apropiadas para el manejo del medio ambiente, la información ambiental y la formación de una conciencia pública sobre la preservación del entorno son esenciales en la formulación de la política ambiental.

Por ello los Estados signatarios acuerdan lo siguiente:

Creación, objeto y constitución

Artículo 1º: Créase el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) como organismo permanente para la concertación y elaboración de una política ambiental coordinada entre los Estados miembros.

Artículo 2º: El COFEMA tendrá los siguientes objetivos:

1. Formular una política ambiental integral, tanto en lo preventivo como en lo correctivo, en base a los diagnósticos correspondientes, teniendo en consideración las escalas locales, provinciales, regionales, nacionales e internacionales.

2. Coordinar estrategias y programas de gestión regionales en el medio ambiente, propiciando políticas de concertación como modo permanente de accionar, con todos los sectores de la Nación involucrados en la problemática ambiental.

3. Formular políticas de utilización conservante de los recursos del medio ambiente.

4. Promover la planificación del crecimiento y desarrollo económico con equidad social en armonía con el medio ambiente.

5. Difundir el concepto de que la responsabilidad en la protección y/o preservación del ambiente debe ser compartida entre la comunidad y el Estado.

6. Promover el ordenamiento administrativo para la estrategia y gestión ambiental en la Nación, provincias y municipios.

7. Exigir y controlar la realización de estudios de impacto ambiental, en emprendimientos de efectos interjurisdiccionales, nacionales e internacionales.

8. Propiciar programas y acciones de educación ambiental, tanto en el sistema educativo formal como en el informal, tendientes a elevar la calidad de vida de la población.

9. Fijar y actualizar los niveles exigidos de calidad ambiental y realizar estudios comparativos, propiciando la unificación de variables y metodologías para el monitoreo de los recursos ambientales en todo el territorio nacional.

10. Constituir un banco de datos y proyectos ambientales.

11. Gestionar el financiamiento internacional de proyectos ambientales.

Artículo 3º: El COFEMA será una persona jurídica de derecho público constituida por los Estados que lo ratifican, el gobierno federal y las provincias que adhieran con posterioridad y la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 4º: Los Estados partes se obligan a adoptar a través del poder que corresponda las reglamentaciones y normas generales que resuelva la asamblea cuando se expida en forma de resolución.

En caso de incumplimiento o de negatoria expresa, la asamblea en la reunión ordinaria inmediata, considerará las alternativas de adecuación al régimen general que presentare el Estado miembro o la secretaría ejecutiva.

Composición del COFEMA

Artículo 5º: El COFEMA estará integrado por la asamblea. La secretaría ejecutiva y la secretaría administrativa.

De la asamblea

Artículo 6º: La asamblea es el órgano superior del consejo con facultades de decisión, y como tal, es la encargada de fijar la política general y la acción que éste debe seguir.

Estará integrada por un ministro o funcionario o funcionario representante titular o por su suplente, designados expresamente por el Poder o Departamento Ejecutivo de los Estados miembros.

Artículo 7º: La asamblea elegirá entre sus miembros presentes por una mayoría de dos tercios de sus votos, un presidente que durará en sus funciones hasta la sesión de la próxima asamblea ordinaria.

Artículo 8º: Las asambleas serán ordinarias y extraordinarias.

Las ordinarias se reunirán dos veces al año en el lugar y fecha que indique la asamblea anterior.

Las extraordinarias se reunirán dos veces al año en el lugar y fecha que indique la asamblea anterior.

Las extraordinarias se convocarán a pedido de una tercera parte de los miembros del Consejo o por la Secretaría Ejecutiva.

Artículo 9º: La asamblea se expedirá en forma de:

- a) Recomendación: determinación que no tendrá efecto vinculante para los Estados miembros;
- b) Resolución: decisión con efecto vinculante para los Estados miembros.

Atribuciones de la asamblea

Artículo 10º: Serán atribuciones de la asamblea:

- a) Dictar el reglamento de funcionamiento del Consejo;
- b) Establecer y adoptar todas las medidas y normas generales para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 2º;
- c) Proponer los aportes que deberán realizar los Estados miembros para el sostenimiento del organismo;
- d) Aprobar el proyecto de presupuesto anual del Consejo que deberá presentar la Secretaría Ejecutiva;
- e) Dictar las normas para la designación del personal;
- f) Crear las comisiones y consejos asesores necesarios para el cumplimiento de sus fines;
- g) Aprobar anualmente un informe ambiental elaborado por la Secretaría Ejecutiva y que será difundido en los Estados miembros;
- h) Evaluar la gestión de la Secretaría Ejecutiva.

Quórum y votación

Artículo 11º: La Asamblea deberá sesionar con un quórum formado por la mitad de los miembros del Consejo.

Artículo 12º: Cada miembro de la Asamblea tendrá derecho a un voto.

Artículo 13º: Las decisiones de la Asamblea serán tomadas por el voto de la mitad más uno de sus miembros presentes, salvo cuando se estipule una mayoría superior.

Artículo 14º: La Secretaría Ejecutiva presidida por el presidente de la asamblea será el órgano ejecutivo y de control. Expedirá las instrucciones necesarias para el cumplimiento de estas resoluciones, indicando en el informe pertinente, que elevará a la asamblea ordinaria, las dificultades y alternativas que crea oportunas.

Artículo 15º: La Secretaría Ejecutiva estará formada por un delegado de cada una de las regiones en que la Asamblea resuelva dividir el país.

La representación será anual y rotativa entre los miembros que formen cada región.

Artículo 16º: La Secretaría Ejecutiva comunicará fehacientemente la convocatoria a asamblea, con una antelación de no menos de diez días y debiendo incluirse el orden del día de la misma.

Artículo 17º: La Secretaría Ejecutiva promoverá la concertación de acuerdos entre los Estados miembros a fin de integrar las jurisdicciones.

De la Secretaría Administrativa

Artículo 18º: La Secretaría Administrativa será designada y organizada por la Asamblea Ordinaria.

Artículo 19º: Sus funciones serán la gestión administrativa y presupuestaria del organismo.

Disposiciones complementarias

Artículo 20º: El presente acuerdo será ratificado por los miembros de conformidad con sus respectivos procedimientos legales.

No se adquirirá la calidad de miembro hasta que este procedimiento se haya concluido.

Artículo 21º: La ratificación y adhesiones posteriores deberán contener la aceptación o rechazo liso y llano del mismo, sin introducir modificaciones.

Artículo 22º: Las ratificaciones y adhesiones serán entregadas a la Secretaría Administrativa, la cual notificará su recepción a todos los miembros.

Artículo 23º: La sede del COFEMA estará constituida en la jurisdicción que representa el presidente de la Asamblea.

Artículo 24º: Para la modificación de la presente acta se requerirá el voto de las dos terceras partes de los Estados miembros.

Artículo 25º: El presente Acuerdo podrá ser denunciado por los miembros del COFEMA con un aviso previo de noventa días y será comunicado, en forma fehaciente, al presidente de la Asamblea, quedando excluido, desde entonces, de los alcances del mismo.

Disposiciones transitorias

Artículo 26º: La Secretaría Administrativa corresponderá hasta su constitución definitiva al representante de la provincia de La Rioja.

Artículo 27º: El COFEMA comenzará a funcionar a los noventa días corridos, contados desde la fecha de la Asamblea constitutiva, siempre que durante ese lapso haya sido ratificado este acuerdo, o hayan adheridos, al menos siete jurisdicciones, o después de esa fecha, si este número de miembros se alcanzase.

Artículo 28º: Los firmantes de la presente acta, quienes actúan a referéndum de los Poderes Provinciales representan a las siguientes jurisdicciones: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, La Rioja, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Ai-

res, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán. Firmado: Doctora Cristina Maiztegui, asesora de la Comisión Interministerial de Política Ambiental, Asesoría General de Gobierno, Provincia de Buenos Aires; Arquitecta Julia Mercedes Corpacci, Directora de Medio Ambiente, Provincia de Catamarca; Ingeniero Daniel Esteban Di Giusto, Subsecretario de Gestión Ambiental, Provincia de Córdoba, Señor Emilio Eduardo Díaz, Subsecretario de Recursos Naturales y Ecología, provincia de Formosa; Arquitecto Mauro Nicolás Bazán, Director General de Gestión Ambiental, Provincia de La Rioja; Arquitecto Ricardo Jilek, Director General de Medio Ambiente, Provincia de Mendoza; Licenciado Alberto Morán, Subsecretario de Medio Ambiente, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires; Licenciada Janette S. De Yankelevich, Directora General de Gestión Ambiental, Provincia del Neuquén; Arquitecto Sergio Perota, miembro del Consejo Provincial de Medio Ambiente, Provincia de Salta; Licenciado Federico Ozollo, Asesor del Ministerio de Acción Social y Salud Pública, Provincia de San Juan; Ingeniero Jorge Alberto Hamerly, Director General de Saneamiento Ambiental; Ingeniero Julio Oscar Graieb, Director General de Saneamiento Ambiental, Provincia de Tucumán. Previa lectura y ratificación se firma doce (12) ejemplares de un mismo tenor a sus efectos, en la ciudad de La Rioja a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 1990.

RAFAEL M. PASCUAL.
Roberto C. Marafioti.

Anexo II

PACTO FEDERAL AMBIENTAL

En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los cinco días del mes de julio del año mil novecientos noventa y tres.

En presencia del señor Presidente de la Nación, Doctor Carlos Saúl Menem, señor Ministro del Interior, Doctor Gustavo Beliz, la señora Secretaria de Estado de Recursos Naturales y Ambiente Humano y señores Gobernadores de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, y el señor Intendente de la Ciudad de Buenos Aires.

Las autoridades signatarias declaran:

CONSIDERANDO:

Que la preservación, conservación, mejoramiento y recuperación del ambiente son objetivos de acciones inminentes que han adquirido dramática actualidad, desde el momento en que se ha tomado conciencia de que el desarrollo económico no puede estar desligado de la protección ambiental.

Que esta situación compromete, no sólo a todos los estratos gubernamentales de la República, sino también, a cada uno de los ciudadanos, cualquiera sea su condición social o función.

Que la voluntad reflejada en el Pacto Federal firmado en la ciudad de Luján, el 24 de mayo de 1990, y los compromisos contraídos ante el mundo en la CNUMAD '92, hace indispensable crear los mecanismos federales que la Constitución Nacional contempla y, en cumplimiento de ese compromiso, resulta oportuno reafirmar el espíritu y la acción federal en materia de recursos naturales y medio ambiente.

Sr. Presidente (Maqueda). – En consideración en general.

Tiene la palabra la señora senadora Müller.

Sra. Müller. – Señor presidente: en honor al quórum que se está cayendo es que voy a insertar mi discurso. Pero quiero expresar unos breves conceptos sobre esta ley tan importante que vamos a tratar esta noche. Este proyecto es una ley general del ambiente que posibilita en forma apropiada el sistema político y jurídico para la administración del ambiente a nivel nacional.

Este proyecto de ley contempla la integración de un sistema ambiental federal ya que a partir del reconocimiento del Consejo Federal de Medio Ambiente es un instrumento válido para la coordinación de la política ambiental en toda la República Argentina. Así mismo, el proyecto de ley determina objetivos que debe cumplir la política ambiental como puede ser: asegurar la preservación de los recursos naturales y culturales por la acción del hombre, fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión; asegurar la conservación de la diversidad biológica; posibilitar la sustentabilidad ecológica; económica y social del desarrollo; y promover cambios en los valores y conductas sociales a través de la educación ambiental.

La política y las normas derivadas deben estar sujetas a ciertos principios, éstos son: el de prevención, responsabilidad, subsidiariedad, equidad intergeneracional, solidaridad, sustentabilidad o el principio precautorio.

Se han contemplado además seis instrumentos básicos para la gestión adecuada del ambiente: el ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación de impacto ambiental, el sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas, la educación ambiental, el sistema de diagnóstico e información ambiental y el régimen de promoción del desarrollo sustentable.

Desde el punto de vista jurídico, el nuevo texto constitucional posibilita quizá la máxima protección que puede preverse para los bienes colectivos: la obligación de reparar el daño ambiental, que en la actualidad no posee regulación específica.

En el capítulo de daño ambiental propuesto —tanto como resultado de hechos como de actos jurídicos— se establece la regla general de la responsabilidad ambiental, la que será objetiva —es decir, independiente de la culpa de quien la cause—; y por ello la pena será la restauración del ambiente dañado, salvo en casos excepcionales en que podrá autorizarse el pago de una indemnización sustitutiva destinada a conformar un fondo de compensación ambiental.

En concordancia con lo que siempre hemos sostenido, se establece que la Justicia competente para el juzgamiento de los ilícitos ambientales civiles no es otra que la Justicia ordinaria, procurando se revierta la actual e injustificada tendencia de federalizar el tratamiento de los ilícitos ambientales.

Señor presidente: he expuesto muy sucintamente algunos fundamentos que sostienen este proyecto de ley que considero de singular importancia, porque se erige en la ley básica para el tratamiento de los temas ambientales, nos brinda instrumentos jurídicos para el logro de una mejor calidad de vida para nuestro pueblo así como también promueve una protección ambiental integral para la República Argentina.

Finalmente, quiero agradecer a los componentes de las distintas comisiones el dictamen por unanimidad en este proyecto.

A su vez, deseo reiterar algo sobre lo cual estoy profundamente convencida: los temas relacionados con el medio ambiente no tienen fronteras; requieren del aporte de todos los sectores, con el máximo respeto debe servirnos como factor de unión y no pertenece a ningún partido político sino a toda la sociedad.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Marcelo Eduardo López Arias.

—Se llama para formar quórum.

Sr. Presidente (López Arias). — Cuando contemos con el quórum reglamentario, procederemos a su votación.

Tiene la palabra la señora senadora Sapag.

Sra. Sapag. — Señor presidente: adelanto mi voto positivo a este proyecto. Y debido al esca-

so margen de quórum, solicito la inserción de mis fundamentos.

Sr. Presidente (López Arias). — Así se hará, señora senadora.

Tiene la palabra el señor senador Martí.

Sr. Martí. — Señor presidente: en primer lugar, deseo manifestar mi apoyo a todo lo dicho por la señora presidenta de la comisión, senadora Müller. Se ha trabajado muy intensamente en este proyecto y me parece que es de una trascendencia extraordinaria.

Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, América latina ha realizado progresos importantes en materia ambiental. Nuestros países, pese a la gravedad de los problemas que todavía enfrentan y pese a la urgencia de abordarlos, han logrado avances significativos en la esfera del desarrollo sostenible.

El nivel de conciencia de la gente ha aumentado considerablemente y los problemas del desarrollo sostenible han dejado de ser una inquietud de unos pocos para convertirse en un tema ampliamente debatido por los habitantes de la región.

Durante el último decenio, en el marco del proceso de globalización a escala mundial, los países de América latina han estado sometidos a diversas influencias externas de carácter político y económico, cuyos vehículos han sido —entre otros factores— las inversiones, el comercio, la deuda externa, la transferencia de tecnología, la asistencia para el desarrollo, etcétera.

Podemos decir que hoy nos encontramos en una etapa contradictoria en la esfera ambiental, entre tendencias económicas y tecnológicas que empiezan a ser favorables para el ambiente pero, al mismo tiempo, se siguen acumulando presiones derivadas de viejos procesos productivos o de ocupación territorial.

En este sentido, es necesario considerar ciertos aspectos fundamentales sobre los que se deberá intervenir para el logro de un desarrollo sostenible.

La mayoría de los sectores de la producción y numerosos sectores económicos del Estado siguen considerando que los principios de protección ambiental y de desarrollo sostenible son un factor externo que obstaculiza su desarrollo.

Las políticas económicas en materia de energía, agricultura, industria y desarrollo urbano no han incorporado instrumentos o herramientas de gestión ambientalmente adecuados.

La liberalización de las políticas comerciales y el aumento de las inversiones extranjeras directas han modificado el rumbo del desarrollo, el perfil de las exportaciones y, con ello, las condiciones ambientales en muchos países. Si se busca aumentar y mejorar los vínculos comerciales internacionales, será necesario incorporar una marcada especialización de las condiciones ambientales de la producción en ramas de la actividad que hacen uso intensivo de los recursos naturales.

Así, es fundamental que los países latinoamericanos incorporen urgentemente formas sostenibles de producción y consumo y formas de inserción más favorables en el contexto de la globalización.

Admitir con todas sus consecuencias un nuevo modelo de desarrollo implica esforzarse en propiciar un profundo cambio en el actual. Significa introducir nuevas pautas de producción y consumo y adquirir un compromiso personal y social frente a la contaminación y el consumo de recursos, a la producción de residuos, a la degradación de los recursos naturales y a la pérdida de biodiversidad en todo el mundo. En todo caso, no promover este cambio supone poner en cuestionamiento nuestro futuro.

Se debe destacar que en los países de Latinoamérica la conciencia sobre los aspectos ambientales del desarrollo y el concepto conexo de desarrollo sostenible han ido penetrando gradualmente en las políticas públicas y algunas prácticas económicas y sociales, hecho que se ve reflejado en la creación de diversas instituciones y en la formulación de estrategias y políticas.

Es necesario incorporar en forma progresiva y permanente iniciativas y acciones que consoliden un desarrollo sostenible en el plano regional y, consecuentemente, en los planos nacionales involucrados.

En este sentido, se deben encarar acciones políticas articuladas que abarquen los aspectos legales, sociales, económicos y educativos, así como los institucionales de carácter nacional e internacional.

En la República Argentina la situación de los temas ambientales tomó una relevancia signifi-

cativa a partir de la reforma constitucional de 1994, con la previsión de los aspectos que se refieren a la preservación y conservación del ambiente y sus recursos.

Los constituyentes introdujeron el artículo ambiental en el nuevo texto y procuraron establecer los principios sustanciales que determinarían no sólo una regulación específica respecto de las actividades de incidencia ambiental, sino también la necesidad de encaminarnos hacia la implementación de un desarrollo sustentable.

La materia ambiental se encuentra tratada en el capítulo de "Derechos y Garantías" y detalla, entre otras cosas, el derecho a tener "...un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano...", el que nos permitirá aumentar las posibilidades individuales y colectivas de mejorar nuestra calidad de vida y la de las generaciones presentes y futuras, así como preservar nuestro medio ambiente y los recursos naturales.

Se modificó así la relación entre los estados provinciales y la Nación, adoptándose como alternativa para la protección ambiental la coordinación entre los poderes concurrentes de los dos niveles de gobierno pero con un complejo sistema, único en el texto constitucional, por el cual le corresponde a la Nación fijar los presupuestos mínimos de protección ambiental —que es lo que estamos tratando de hacer a través de la aprobación de este proyecto de ley— y a las provincias, complementarlos.

El artículo 41 de la Constitución Nacional plantea una serie de premisas que estructuran un sistema jurídico ambiental distinto en la regulación de las actividades que tienen incidencia ambiental. Este sistema es integral, tiende a llenar los vacíos jurídicos preexistentes y, principalmente, conlleva a resolver los inconvenientes que las normas vigentes presentan en cuanto a la aplicabilidad y al sistema federal de gobierno.

Si bien en el proceso de reforma constitucional y en las nuevas constituciones provinciales se ha reconocido explícitamente el derecho a la preservación del ambiente y consagrado su protección como objetivo del Estado, dando lugar al dictado de leyes de protección ambiental, en algunas de nuestras provincias, entre las que podemos citar como pioneras a Córdoba y Mendoza, el ambiente no permite acciones ais-

ladas. Ningún Estado provincial puede aspirar a proporcionar a sus habitantes condiciones adecuadas para el desarrollo de sus actividades en forma insular o independiente de la región del país en que se halla inserto.

En este sentido, existe hasta hoy en la República Argentina un mandato constitucional incumplido, lo que origina una gran dificultad en la conceptualización de un adecuado sistema jurídico ambiental que dé lugar a integrar el alcance de los presupuestos mínimos de protección ambiental en cada circunstancia de tiempo y espacio. Este proyecto de ley trata de subsanarla.

El hecho de no contar con un instrumento jurídico que permita diseñar el sistema político y jurídico para la administración del ambiente a nivel nacional, así como también definir y determinar los alcances de los presupuestos mínimos y definir los instrumentos para la gestión ambiental y la promoción del desarrollo sustentable, genera actualmente serios problemas tanto para la efectiva protección de nuestros recursos como para la competitividad regional de nuestro país en el marco del Mercosur.

Se generan así riesgos internos, en virtud de los cuales cada provincia dicta sus propias normas ambientales sin ninguna pauta de nivel nacional que proporcione garantías de protección y competitividad entre las diferentes regiones, generando una inadecuada explotación de nuestros ecosistemas y un descontrolado proceso de contaminación, que beneficia económicamente a las regiones que no cuentan con normas ambientales específicas.

En el frente externo, existe el riesgo real de acusar a la República Argentina de *dumping* por razones ambientales, al ser hoy nuestro país prácticamente el único del Mercosur que no cuenta con una norma general del ambiente, lo cual disminuye notablemente su competitividad y sus posibilidades de integración regional.

Toma así este proyecto de ley un carácter estratégico, tanto para la política interna como para la externa, al incorporar las pautas legales de una adecuada política ambiental nacional; factor de primordial importancia en la búsqueda de un desarrollo sustentable para nuestro país.

Existe, consecuentemente, la urgencia de sancionar una ley general del ambiente que interprete en forma integral los artículos 41, 43 y 124 de la Constitución Nacional, determinando

los objetivos ambientales a largo plazo y marcando las políticas sustanciales que nos integren en el camino del desarrollo sustentable. También existe la consecuente necesidad de incorporar un conjunto de leyes particulares o sectoriales que determinen las pautas o presupuestos mínimos, comunes y uniformes de protección ambiental en cada tema que lo requiera. Estas leyes deberán ser complementadas por las leyes provinciales, que establecerán los aspectos particulares adaptados a la realidad local y regional.

Este proyecto de ley que hoy se propone es fundamental para la constitución de un nuevo sistema jurídico ambiental en la Argentina, fijándose a través de él los objetivos básicos de política ambiental nacional que nos permitan obtener resultados enmarcados en los principios del desarrollo sustentable, contemplando asimismo los instrumentos necesarios para su implementación.

A través de este proyecto se consolidará un sistema ambiental federal como instrumento válido para la coordinación de la política ambiental en la República Argentina y para el logro de los compromisos asumidos en el Pacto Federal Ambiental por el Estado nacional y las provincias.

En particular, en este proyecto se han contemplado los instrumentos básicos que deben ser tenidos en cuenta en la generación de la política y gestión ambiental: los presupuestos mínimos, el ordenamiento ambiental, la evaluación del impacto ambiental, la educación ambiental, el diagnóstico y la información ambiental, la participación ciudadana, las garantías ambientales, los mecanismos de integración federal, las pautas de control y la reparación de los daños ambientales que a veces las empresas producen.

La implementación adecuada de estos instrumentos deberá establecerse a través de leyes de presupuestos mínimos a nivel nacional; y con relación a nuestras realidades regionales, a través de leyes provinciales específicas.

El desarrollo de estos instrumentos, su adecuada integración e implementación, nos permitirán prevenir los problemas que genera la crisis ambiental actual...

Sra. Müller. — ¿Me permite...?

Sr. Presidente (López Arias). — Señor senador: la señora senadora Müller le pide una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Martín. – Cómo no.

Sra. Müller. – En honor a que se nos está cayendo el quórum, y no quiero que lo tome como una falta de respeto porque sabe que lo aprecio por el trabajo que realizamos juntos en la comisión, le pido al señor senador que sea lo más sintético posible. En caso contrario, cuando se ponga a votación el proyecto, no vamos a tener quórum.

Sr. Presidente (Maqueda). – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Martí.

Sr. Martí. – Disculpe, tengo el mayor interés en que el proyecto se apruebe y que los señores senadores conozcan el trabajo que ha hecho la comisión presidida por la señora senadora; por eso estaba leyendo. Ya termino; cinco minutos más y termino.

El desarrollo de estos instrumentos, su adecuada integración e implementación, nos permitirán revertir los problemas que genera la crisis ambiental actual.

Se han establecido así en este proyecto de ley los aspectos fundamentales que debe considerar una adecuada política ambiental. En ese sentido, caben destacar: ordenamiento ambiental del territorio, a los efectos de lograr una adecuada utilización del mismo; evaluación de impacto ambiental como herramienta fundamental; educación ambiental; información ambiental; participación ciudadana; política ambiental a nivel nacional, y definición de daño ambiental.

Considero que la aprobación de este proyecto de ley es la manifestación de nuestro firme compromiso para que el país avance hacia un nuevo modelo de desarrollo basado en lo sustentabilidad. Avanzar hacia la sustentabilidad supone recoger y legar beneficios ambientales, sociales, económicos y culturales para nosotros y para las generaciones futuras.

Es necesario, por lo tanto, edificar nuestra calidad de vida sobre los cimientos de la sustentabilidad: el bienestar económico, la justicia social y un medio ambiente limpio y saludable. Estos pilares, los tres, constituyen la base imprescindible del modelo de desarrollo. Así, en este proyecto de ley, se han considerado como requisitos básicos la protección del medio ambiente, el uso eficiente de los recursos y la capacidad productiva de nuestros ecosistemas.

Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a las señoras y señores senadores que nos acompañen con su voto favorable en la sanción

de este proyecto de ley general del ambiente, que promoverá la conservación de nuestros recursos naturales y contribuirá a mejorar las condiciones de la competitividad en los tiempos de crisis que vivimos los argentinos.

Sr. Presidente (Maqueda). – Si los señores senadores toman asiento, vamos a votar.

En primer lugar, si no se hace uso de la palabra, se van a votar las inserciones solicitadas.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Maqueda). – Aprobadas.¹

En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Maqueda). – Señora senadora miembro informante de la comisión: la Presidencia sugiere, si bien no hay títulos numerados, como hay títulos por los temas que se tratan y para darle mayor agilidad al trámite, votar por cada uno de los títulos de estos temas.

Sra. Müller. – Me parece correcto, señor presidente.

–Asentimiento.

Sr. Presidente (Maqueda). – Como hay asentimiento, así se hará.

–Se enuncian y aprueban el título primero: Bien jurídicamente protegido, artículos 1º a 3º, el título segundo: Principios de la política ambiental, artículos 4º y 5º, el título tercero: Presupuesto mínimo, artículo 6º, el título cuarto: Competencia judicial, artículo 7º, el título quinto: Instrumentos de la política y la gestión ambiental, artículo 8º, el título sexto: Ordenamiento ambiental, artículos 9º y 10, el título séptimo: Evaluación del impacto ambiental, artículos 11 a 13, el título octavo: Educación ambiental, artículos 14 y 15, el título noveno: Información ambiental, artículos 16 a 18, el título décimo: Participación ciudadana, artículos 19 a 21, el título undécimo: Seguro ambiental y fondo de restauración, artículo 22, el título duodécimo: Sistema federal ambiental, artículos 23 y 24, el título decimotercero: Ratificación de acuerdos federales, artículo 25, título decimocuarto: Autogestión, artículo 26, título decimoquinto: Daño ambiental, artículos 27 a 33, y el título decimosexto: Del Fondo de Compensación Ambiental, artículo 34.

–El artículo 35 es de forma.

¹ Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda definitivamente sancionado el proyecto ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

60

MODIFICACION DEL PLAN DE LABOR Y MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Baglini. – Pido la palabra para una moción de orden.

Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Baglini.

Sr. Baglini. – Señor presidente: solicito un apartamiento del reglamento, a los efectos de pedir el tratamiento en la próxima sesión del expediente S.-2.540/02, el cual fundaré brevemente.

El 3 de octubre de 2002 presentamos juntamente con el señor senador Lamberto, un proyecto para excluir al Banco de Inversión y Comercio Exterior de las reglas del artículo 48 de la Ley de Presupuesto, a los efectos de permitir su participación en fondos fiduciarios.

Las comisiones de Economía y de Presupuesto y Hacienda dictaminaron el 25 de octubre. Pero el 30 de octubre y por decreto de necesidad y urgencia 2.209/02, el Poder Ejecutivo nacional –copiando textualmente parte de los fundamentos de nuestra iniciativa y alegando que existen circunstancias excepcionales que impiden seguir el procedimiento legislativo– consagra lo establecido en nuestro proyecto de ley.

El decreto no sólo introduce una afirmación inexacta respecto de la existencia de obstáculos para el tratamiento legislativo, sino también una gigantesca incertidumbre, porque se trata de fondos fiduciarios destinados fundamentalmente a financiar operaciones de comercio exterior.

Obviamente, no se logra la misma estabilidad con un decreto que con un proyecto modificatorio de la ley respectiva, el cual tenía dictamen cinco días antes del dictado del decreto, y diez días antes de su publicación en el Boletín Oficial.

Esta situación merecería el planteamiento de una cuestión de privilegio por usurpación de las atribuciones legislativas, y por violación del alcance de las facultades delegadas.

Pero como el objeto es subsanar los problemas y no complicarlos, y dado que existe dictamen de las comisiones pertinentes, pido que nos apartemos del reglamento al solo efecto de so-

licitar una preferencia respecto del proyecto S.-2.540/02 –que ya tiene dictamen de comisión– para la próxima sesión o la subsiguiente.

Sr. Presidente (López Arias). – Señor senador Baglini, obviamente que su pedido lo someteré a votación, ya que es mi obligación hacerlo. Pero debo recordarle que en la reunión de labor parlamentaria –en la que usted tomó parte–, se resolvió respetar estrictamente los tiempos fijados para la sesión, y dejar las preferencias para su momento, a los efectos de guardar el orden de los temas.

De todas maneras, tengo que someter a votación su propuesta.

Si no se hace uso de la palabra, se va votar en primer lugar el apartamiento del Plan de Labor.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (López Arias). – En consideración la moción de preferencia para la próxima sesión formulada por el señor senador Baglini, pero para tratarla como segundo tema del Plan de Labor en virtud de la anterior aprobación de otra moción.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la preferencia.

61

APERTURA DE LA PLANTA PUERTO EN LA DARSENA “E”, PUERTO NUEVO, BUENOS AIRES

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el proyecto de comunicación del señor senador Pardal y otros señores senadores, por el que se solicita la apertura de la Planta Puerto en la Dársena “E”, en el Puerto Nuevo de Buenos Aires, dedicada a la producción vitivinícola.

–El texto es el siguiente:

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a través del organismo correspondiente, realice las diligencias necesarias a fin de gestionar la apertura y puesta en funcionamiento de la Planta Puerto, ubicada en la Dársena “E”, Puerto Nuevo, Buenos Aires, que optimizará la exportación de vinos y mos-

Solicitada por la señora senadora Müller

Señor presidente:

La conciencia ambiental de nuestro país comienza a desarrollarse en un período de historia reciente, y sin dudas, los hechos más destacables, que marcan verdaderos hitos en estos años, son: la constitución del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), en agosto de 1990, la firma del Pacto Federal Ambiental, en julio de 1993; y la reforma constitucional de 1994 que introduce, las cláusulas ambientales en su artículo 41, además de otros artículos de incidencia directa como el 43 y el 124.

En este contexto, debemos destacar, el deseo de los constitucionalistas de poner en marcha los principios del desarrollo sustentable, con el fin de implementar un proceso de crecimiento económico, en un marco de equidad social y preservando nuestros recursos naturales y culturales (ambientales), tal su definición conceptual. Asimismo, a partir de 1994, se establece la necesidad de perfeccionar e instrumentar un sistema normativo ambiental, de orden nacional y provincial, y de promover la coordinación entre todos los organismos que se relacionan con la política ambiental.

La reforma constitucional nos indicó que las normas que regulan actividades con incidencia ambiental, deben cambiar su enfoque jurídico, en forma sustancial; desde 1994, el Congreso de la Nación debe sancionar leyes comunes a todo el territorio nacional, determinando los aspectos básicos, niveles comunes y mínimos a ser regulados, y los Estados provinciales complementarán estas normas con aspectos más específicos o más estrictos, si así lo requieren, acordes a sus propias realidades.

Sin duda, los constituyentes adoptaron como alternativa para la protección ambiental la coordinación entre los poderes concurrentes por el cual, le corresponde a la Nación fijar los presupuestos mínimos de protección ambiental y a los Estados provinciales, complementarlos.

El doctor Guillermo Cano, uno de los más respetables y prestigiosos especialistas en derecho ambiental, de reconocimiento internacional, ha señalado que en la Argentina el dominio público eminente de los recursos naturales pertenece a las provincias, y con él, el poder de legislarlo y administrarlo, y el ejercer el poder de policía cuando la propiedad civil o el derecho a usarlos, es atribuido a particulares. Este concepto fundamental, recogido por el artículo 124 de la Constitución, creo, está plasmado integralmente en el texto normativo dictaminado.

Aportes y opiniones recogidos de numerosos especialistas y sectores consultados, indicaron la necesidad de sancionar una Ley General del Ambiente, que debe interpretar los artículos 41, 43 y 124 de la Constitución, determinar los objetivos ambientales a largo plazo y marcar las políticas sustanciales que nos integren en el camino del desarrollo sus-

tentable; y también, leyes específicas o sectoriales que determinen presupuestos mínimos, comunes y uniformes, de protección ambiental en cada tema que lo requiera, las que deberán ser complementadas por leyes provinciales.

En particular, la sanción de una ley general del ambiente es de vital importancia porque posibilita desarrollar, en forma apropiada, el sistema político y jurídico para la administración del ambiente de nivel nacional, como también, definir los instrumentos para la gestión ambiental y la promoción del desarrollo sustentable, entre otros.

La sanción de esta ley contempla además la integración de un Sistema Ambiental Federal, a partir del reconocimiento del Consejo Federal de Medio Ambiente, como instrumento válido para la coordinación de la política ambiental en la República Argentina y la asignación de funciones específicas para el logro de los compromisos asumidos en el Pacto Federal Ambiental por el Estado nacional y las provincias.

Asimismo, se determinan los objetivos que debe cumplir la política ambiental, como pueden ser: el asegurar la preservación de los recursos naturales y culturales, por la acción del hombre; fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión; asegurar la conservación de la diversidad biológica; posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo; y promover cambios en los valores y conductas sociales a través de la educación ambiental.

La política y las normas derivadas deben estar sujetas a ciertos principios, como el de prevención, de responsabilidad, de subsidiariedad, de equidad intergeneracional, de solidaridad, de sustentabilidad o el principio precautorio, que establece que cuando haya peligro de daño grave, la ausencia de certeza científica, no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos.

Se han contemplado, además, seis instrumentos básicos para la gestión adecuada del ambiente: el ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación de impacto ambiental, el sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas, la educación ambiental, el sistema de diagnóstico e información ambiental, y el régimen de promoción del desarrollo sustentable. La aplicación eficiente de estos instrumentos, su interacción e implementación en base a nuestras realidades, nos permitirán encaminarnos hacia una sustentabilidad económica, social y ecológica, que prioritariamente necesitamos.

Desde el punto de vista jurídico, el nuevo texto constitucional posibilita, quizás, la máxima protección que puede preverse para los bienes colectivos: la obligación de reparar el daño ambiental que, en la actualidad, no posee regulación específica. Pero, debemos avanzar sobre los problemas que afectan a toda una comunidad, privilegiando las medidas preventivas y correctivas de las causas de degra-

dación y no sólo indemnizar los efectos dañinos. Recordemos que, hay daño colectivo cuando se lesiona un interés que afecta a toda la comunidad.

En el capítulo de daño ambiental propuesto, tanto como resultado de hechos como de actos jurídicos, se establece la regla general de la responsabilidad ambiental, la que será objetiva, es decir, independiente de la culpa de quien la cause. Y por ello, la "pena" será la restauración del ambiente dañado, salvo en casos excepcionales en que podrá autorizarse el pago de una indemnización sustitutiva, destinada a conformar un Fondo de Compensación Ambiental.

En concordancia con lo que siempre hemos sostenido, se establece que la justicia competente para el juzgamiento de los ilícitos ambientales civiles, no es otra que la justicia ordinaria, procurando se revierta la actual e injustificada tendencia de federalizar el tratamiento de los ilícitos ambientales.

Finalmente, deseo destacar la labor desarrollada por los miembros de las comisiones de competencia que dictaminaron el proyecto logrando con unanimidad. En este sentido, quiero reiterar algo, de lo que estoy profundamente convencida: los temas relacionados con el medio ambiente no tienen fronteras, requieren del aporte de todos los sectores, con el máximo respeto, debe servirnos como factor de unión y no pertenecen a ningún partido político, sino a toda la sociedad.

Hace menos de 30 días, en la ciudad de Johannesburgo (Sudáfrica), se llevó a cabo la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible organizada por las Naciones Unidas, la que planteó a través de los diferentes jefes de Estado las estrategias políticas para cambiar el rumbo de la historia de la humanidad, a partir de un plan de acción mundial que detenga el deterioro ambiental y modifique las prácticas de consumo y producción que llevan adelante, principalmente los países desarrollados. Esta ley general del ambiente recoge la mayoría de los alcances y objetivos planteados en tan trascendente cumbre, dando a nuestro sistema jurídico una herramienta esencial y distintiva.

Señor presidente, he expuesto, sucintamente, algunos fundamentos que sostienen este proyecto de ley, que considero de singular importancia, porque se erige en la ley básica para el tratamiento de los temas ambientales, nos brinda instrumentos jurídicos para el logro de una mejor calidad de vida para nuestro pueblo, como también, promueve una protección ambiental integral para la República Argentina, por lo que, solicito su sanción definitiva, y de ser posible, unánime.

3

Solicitada por la señora senadora Sapag**LEY GENERAL DEL AMBIENTE**

Las leyes que se sancionen en materia ambiental no sólo deben actuar sobre los recursos naturales,

sino que principalmente deben estar orientadas a tener un fuerte impacto social, mejorando la calidad de vida de la población.

La Ley General del Ambiente constituye una ley marco, o sea una especie de referente constitucional en materia ambiental, que establece grandes directrices políticas. Satisface compromisos pendientes en materia legislativa desde la vigencia de la nueva Constitución, al sancionar los denominados "Presupuestos mínimos ambientales".

A pesar de su importancia, esta ley no genera efectos inmediatos en la sociedad.

Para lograrlos, es necesario transitar un arduo camino en tres importantes direcciones:

- a) *El camino de la reglamentación.* Si bien existe un conjunto normativo vigente, será necesaria la reglamentación de la presente ley, tanto en la jurisdicción nacional como en cada una de las provincias y municipios, para aspirar a una inserción práctica de estos principios en la sociedad;
- b) *El camino de la educación y difusión.* La ley y su reglamentación deben ser difundidas ampliamente entre todos los actores sociales involucrados en la cuestión ambiental.

Además, la educación y difusión deben ser continuas en el tiempo, para garantizar que toda la sociedad sea consciente en forma permanente de las normas ambientales y sucesivas actualizaciones que se produzcan al marco reglamentario;

- c) *El camino de la fiscalización y control.* Por otro lado, la sola vigencia de la ley no es suficiente para garantizar a la sociedad el logro de los principios en aquellos enunciados.

Para ello es necesario que el Estado cumpla eficazmente uno de sus roles indelegables, cual es el de fiscalizar y controlar el cumplimiento de dicho cuerpo normativo.

La ley general del ambiente tendrá implicancias en todos aquellos organismos y dependencias de la Nación, provincias y municipios vinculados con la temática ambiental.

Para optimizar los resultados positivos en la sociedad, es necesario también que las autoridades de aplicación ambiental de cada jurisdicción puedan actuar transversalmente respecto de las demás dependencias estatales vinculadas, unificando criterios y metodologías, utilización de recursos humanos, materiales y económicos.

Por lo tanto, se hace conveniente mejorar la integración de los diferentes organismos y dependencias con incumbencia en materia ambiental, constituyendo el flujo de información entre ellos uno de los aspectos prioritarios a ser atendidos en el corto plazo, para el establecimiento de criterios y metodologías compatibles entre las diferentes jurisdiccio-

nes. En este sentido, debería prestarse atención a la optimización de las incumbencias y alcances de los diferentes organismos y dependencias del Estado, de tal forma que se mejore la aplicación de políticas ambientales y el correspondiente control y fiscalización, sin menoscabar la independencia provincial en el manejo de sus propios recursos ambientales.

La obtención de logros duraderos en materia ambiental, basados en gestiones "sustentables", requiere de la planificación y el mantenimiento de políticas ambientales, que respetando las leyes de presupuestos mínimos y su marco reglamentario, puedan continuar vigentes más allá de los periodos electivos de gobierno. Esto necesita que los principales actores políticos mantengan la esencia de la gestión ambiental, pudiendo realizarse las adaptaciones que surjan de la propia dinámica que existe entre la sociedad y el ambiente en el cual se desenvuelve.

La complejidad con la que se analiza actualmente a los temas ambientales, debido a la intensa interrelación entre diversas disciplinas y áreas de gobierno, sumado a las fuertes restricciones que imponen la escasez de recursos económicos y financieros, conduce a que para lograr resultados efectivos, la sociedad no podrá esperar solamente a que el Estado asuma toda la responsabilidad en resolver los problemas ambientales. La solución de muchos problemas provendrá de definir nuevos roles y niveles de compromiso de todos los actores sociales. Tal el caso de los residuos sólidos urbanos, en el cual las soluciones modernas implican un compromiso mayor del ciudadano respecto de los residuos que genera y una participación efectiva en el proceso de gestión del mismo, a través de la separación en origen y un manejo responsable en la vía pública.

También es de esperar un mayor nivel de participación de la sociedad en cuanto al control y seguimiento de la aplicación de políticas ambientales, acción que necesariamente deberá estar coordinada e integrada con el Estado, en forma consistente con el sistema de gobierno democrático, republicano y federal. Es así que puede ser relevante el rol que cumplan agrupaciones de usuarios, organizaciones no gubernamentales, etcétera.

Detalle a continuación algunos aspectos a ser tenidos en cuenta al momento de reglamentar la presente Ley General del Ambiente.

Artículo 8º: Control y monitoreo. Es necesario poner énfasis en el control y monitoreo ambiental, utilizando a éstos como instrumento de la gestión ambiental, para verificar el logro de objetivos previamente fijados o bien detectar a tiempo circunstancias que requieran un ajuste en los planes de implementación.

Se deberán seguir criterios de presupuestos mínimos, a ser reglamentados por la autoridad de aplicación ambiental de la Nación y de las provincias,

estableciendo manuales guía de control mínimos que, utilizados como referencia, sean adaptados por cada jurisdicción según las particularidades propias de la situación ambiental local. Una vez reglamentado el control y monitoreo ambiental, es importante promover un programa de capacitación siguiendo los niveles de incumbencia nacional, provincial y municipal, tarea que se puede realizar por etapas temporales y geográficas, aprovechando los avances logrados en diferentes instituciones, como por ejemplo las autoridades de cuencas hídricas.

Estas tareas requerirán esfuerzos importantes por parte de las autoridades de aplicación, que deberán sortear la escasez de recursos y el reducido nivel de prioridad que se asigna a la materia ambiental en estos momentos, por lo que aprovecho la oportunidad para solicitar un fuerte apoyo de este honorable cuerpo legislativo a los organismos que asuman esta responsabilidad.

Artículo 17: Sistema nacional integrado de información. El manejo de la información ambiental es un punto crucial para la toma de decisiones acertadas, obligando a que los parámetros ambientales seleccionados y su método de obtención y registro sean representativos de la realidad.

Permitirá actuar en forma preventiva en relación a los problemas ambientales, en vez de actuar en forma correctiva como estamos obligados actualmente una vez que el problema ya se ha manifestado, produciendo daños y erogaciones de valiosos recursos para su atención.

La reglamentación de la ley deberá estar acompañada de una implementación práctica del sistema de información, tanto en lo relativo a diseño, equipamiento y capacitación, como a su difusión y facilidad de acceso a la información por parte de los usuarios finales.

Será conveniente la integración o una colaboración estrecha entre organismos y reparticiones que gestionan diversas bases de datos existentes actualmente o que están en proceso de implementación, como por ejemplo las de mediciones de niveles y caudales en los ríos, parámetros de calidad de las aguas en algunas cuencas, cobertura de servicios sanitarios de agua potable y cloacas. Esta cooperación conjunta es esencial para optimizar los recursos del país y unificar criterios respecto de la información.

Somos conscientes del reto que implica romper con barreras históricas en cuanto al manejo de la información y el presunto poder que otorga a su poseedor, poder individual que normalmente se opone a los intereses generales de la sociedad y al cumplimiento de los "presupuestos mínimos" objeto de la presente Ley General del Ambiente.

En este sentido se están impulsando proyectos de ley que en cumplimiento de los derechos garantizados por la Constitución, refuercen el acceso de los interesados a la información ambiental, en todo el territorio nacional.

Artículo 18: *Informe anual ambiental*. El informe anual sobre la situación ambiental del país, que deberá ser elaborado por los organismos competentes del Poder Ejecutivo y presentado al Congreso de la Nación, constituirá un instrumento de información significativo.

En la reglamentación de la presente ley, será conveniente que también se incluya con motivo de la presentación de este informe anual, un presupuesto de medidas ambientales a ser implementadas en el próximo ejercicio, de tal forma que la conjunción de ambos informes se transforme en un instrumento de seguimiento y control.

Artículo 22: *Seguro ambiental y fondo de restauración*. Un avance importante de la Ley General del Ambiente lo constituye la obligación de contratar seguros de cobertura para toda actividad riesgosa para el ambiente y la creación de un fondo de restauración.

La implementación reglamentaria de estas medidas deberá garantizar la efectividad en el cobro de los seguros en tiempo y forma, acorde a los daños ambientales que pudieren haberse producido, de tal manera que el administrador del fondo de restauración pueda atender las remediaciones correspondientes.

Apoyado en la estructura administrativa que gestione el seguro y fondo de restauración, resultará conveniente generar los instrumentos que permitan la obtención de fondos para atender pasivos ambientales preexistentes a la presente ley.

Si bien la situación actual del país no es propicia para el desarrollo e implementación de estos instrumentos, sí es oportuno el momento para sentar las bases jurídicas y administrativas que serán aplicadas cuando se logre la estabilidad socioeconómica-política y se inicie la tan esperada etapa de crecimiento.

Artículo 26: *Actividades productivas riesgosas*. La ley y su reglamentación deberán ser aplicadas con el mismo rigor tanto a las actividades productivas riesgosas realizadas por privados, como aquellas que estuvieran a cargo del Estado y las concesionarias de servicios públicos, con incidencia e impactos en el ambiente natural y en la sociedad.

Será importante reglamentar rápidamente qué alcance y detalle corresponde a la definición de "riesgoso" de una determinada actividad, para evitar vacíos en el momento de aplicar la ley.

En este sentido, no deben quedar retrasadas en la adecuación y reglamentación de la presente ley, algunas actividades como por ejemplo lo vinculado a la gestión de residuos sólidos urbanos, la provi-

sión de agua potable y el manejo de las aguas cloacales, la ejecución de planes de viviendas y gestión del uso del suelo.

Artículo 26: *Autogestión*. Es un paso importante de la Ley General del Ambiente, considerar los esfuerzos que en materia de gestión ambiental realicen los privados, concesionarios de servicios públicos y el propio Estado, especialmente en la aplicación de programas de gestión ambiental aceptados internacionalmente como por ejemplo las normativas ISO 14.000.

Si bien dicha autogestión ambiental constituye un avance importante, resultará imprescindible que el Estado aplique criterios y reglas de tal forma que dicha autogestión resulte eficiente en términos ambientales, sea concordante con las políticas que define la autoridad de aplicación local y pueda efectuarse un control y seguimiento de los resultados obtenidos.

Como ocurre en otros ámbitos, no es una actitud responsable dejar solamente a la interpretación del privado la aplicación de medidas de autogestión que tengan como objetivo una mejora del ambiente y de la calidad de vida de la sociedad.

Señores senadores:

Esta Ley General del Ambiente salda una deuda pendiente desde la reforma de la Constitución en 1994.

Esto no nos tiene que conformar, sino todo lo contrario. Debemos promocionar e impulsar la reglamentación práctica de la ley para que sus efectos sobre la sociedad se observen lo antes posible.

Si bien el tema ambiental ha alcanzado prioridad de atención frente a la desocupación, incremento de la pobreza, seguridad y otros males, es nuestra responsabilidad no bajar los brazos en estos aciagos momentos.

La Nación y las provincias disponen de recursos humanos capacitados, cuya formación ha significado una importante inversión de la sociedad. Es necesario estimular su mantenimiento y mejora constante, asociados a la aplicación de la presente Ley General del Ambiente y la normativa reglamentaria que se desarrolle.

Para la obtención de logros ambientales eficaces en tiempo y forma, es indispensable que los recursos humanos existentes de la Nación y las provincias tengan en claro la dirección de política estratégica que se adopta en materia ambiental, y que esta política sea continua a través de los períodos electivos de gobierno, con los eventuales ajustes que establezca la dinámica de la sociedad.